



Pablo Gómez, el talón de Aquiles de la reforma electoral

Pablo Gómez Álvarez se ha convertido en el rostro más incómodo de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum. No solo por su estilo frontal y poco conciliador, sino por la contradicción que encarna: es un político formado, impulsado y sostenido durante décadas por el mismo sistema que hoy pretende desmontar.

Economista, dirigente histórico de la izquierda y protagonista de múltiples transiciones partidistas, Gómez inició su carrera legislativa en 1979 como diputado federal de representación proporcional y ocupó una curul plurinominal en el periodo 1979-1982; volvió a llegar por esa misma vía en 1988-1991. Posteriormente fue diputado de mayoría en varias legislaturas y también senador. Buena parte de su capital político se construyó, precisamente, en un modelo de acceso al poder que hoy la iniciativa busca reducir o eliminar.

Su trayectoria tampoco ha sido lineal ni ajena a acuerdos con gobiernos de otros signos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto participó en los trabajos políticos vinculados al Pacto por México y respaldó reformas impulsadas desde aquel consenso multipartidista, lo que contrasta con la narrativa actual de ruptura con el pasado. Eso explica, en parte, por qué dentro y fuera de

Morena muchos lo ven más como un político del sistema que como un reformador.

El balance de su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco ayudó a fortalecer su credibilidad. Su gestión fue señalada por opositores y por actores del propio oficialismo como poco eficaz en términos de resultados.

Su salida de la UIF no ocurrió en un ambiente de reconocimiento por logros, sino en medio del escándalo por los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas que debían ser revisadas y reguladas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Ya como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —el pretexto para sacarlo de la UIF— su desempeño ha profundizado esa percepción. Desde el inicio marcó distancia con los partidos, a los que descalificó como estructuras cerradas que buscan preservar privilegios. La semana pasada minimizó la relevancia de los organismos autónomos al sostener que el árbitro

electoral debía concebirse esencialmente como una instancia administrativa, no como un contrapeso con autonomía plena. Esa postura obligó a la propia presidenta a matizar que la autonomía del INE no está en riesgo.

Su conducción del proceso tampoco ha sido incluyente. Las dirigencias del PVEM y del PT, aliados del oficialismo, han manifestado molestia por no haber sido incorporados a la discusión de fondo en las semanas previas a la presentación de la iniciativa. Ni Ricardo Monreal ni Adán Augusto López lo consideran un interlocutor funcional para una negociación que exige consenso y control de daños.

A ese perfil se suma un flanco simbólico que ha sido utilizado para cuestionar su congruencia. Durante su etapa en el gobierno fue captado en restaurantes de lujo con vinos franceses, lo que alimentó críticas sobre su distancia con el discurso de austeridad que suele enarbolar.

El resultado es que Pablo Gómez se ha convertido en un factor de fricción para una reforma que, de por sí, enfrenta resistencias políticas, jurídicas y electorales. Su historia como legislador plurinominal, su paso controvertido por la UIF, su respaldo previo a acuerdos como el Pacto por México y su estilo confrontacional como responsable del proyecto electoral colocan a la iniciativa en una zona de vulnerabilidad.

La figura de Pablo Gómez luce más como un catalizador de divisiones que como un articulador de acuerdos. Por ello se espera que, una vez que la iniciativa sea entregada al Congreso, su presencia se diluya y desaparezca. ●

Se ha convertido en factor de fricción para una reforma que enfrenta resistencias políticas, jurídicas y electorales.